EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES Y EL AUGE DEL EXTREMISMO DE EXTREMA DERECHA EN SUDÁFRICA

Intereses comunes entre el poder político y la influencia económica de las grandes empresas tecnológicas, y los retos normativos de abordar el discurso del odio y la desinformación

Sherylle Dass y Yanela Frans
Contribución: Jordan Pitt y Alana Robertson (pasante)
Sudáfrica

Sudáfrica ha visto cómo entidades de cabildeo como Bell Pottinger manipulan las dinámicas sociales para promover unos fines, sin ninguna rendición de cuentas por parte de las grandes empresas tecnológicas. El artículo analiza el efecto que las grandes empresas tecnológicas tienen en la política y la dinámica social sudafricanas cuando se utilizan para promover ideales extremistas y violentos. Con el aumento del poder de las grandes tecnológicas, es imperativo que se implementen medidas para garantizar la protección de los derechos humanos, evitando que se promuevan ideales extremistas de extrema derecha. Con este fin, se analizará la legislación y las políticas que regulan las grandes empresas tecnológicas en Sudáfrica.

Palabras clave
Extrema derecha; extremismo; redes sociales

1. Introducción

El Informe sobre Riesgos Globales 2024 del Foro Económico Mundial señala que la polarización de la sociedad se encuentra entre los tres principales riesgos en el horizonte temporal actual y los próximos dos años, y que, si no se controlan los riesgos tecnológicos, "la verdad se verá sometida a presión".[1] Este informe concluye de forma preocupante que el riesgo más grave previsto es la utilización de la desinformación y la información errónea tanto por parte de agentes extranjeros como nacionales para polarizar las sociedades y las divisiones políticas, lo que socavaría las elecciones y distorsionaría la realidad.[2] En Sudáfrica, se ha observado una tendencia creciente a utilizar las plataformas de redes sociales de las grandes empresas tecnológicas para sembrar la división racial y cultural y popularizar el extremismo de extrema derecha y una identidad nacionalista. En un país como Sudáfrica, cuya historia desde 1994 ilustra una trayectoria ascendente hacia la democracia y la libertad, es motivo de preocupación que esta trayectoria esté descendiendo. El extremismo de extrema derecha es una ideología o movimiento político que se caracteriza por creencias raciales conservadoras extremas, xenofobia, ideales étnico-religiosos, tendencias nacionalistas, o creencias antidemocráticas. El aumento del apoyo a esta ideología no debe tomarse a la ligera, ya que también puede utilizarse como base ideológica para la violencia y el terrorismo, tal y como se señala en el informe del Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (CTED, por su sigla en inglés) de las Naciones Unidas publicado en 2020.[3]

2. Tendencias emergentes de polarización social e ideologías de extrema derecha en las plataformas de las redes sociales

Uno de los primeros usos de las plataformas de redes sociales de grandes empresas tecnológicas para sembrar división racial en Sudáfrica se

remonta a 2016 y 2017. Bell Pottinger, una multinacional de relaciones públicas británica conocida por su controvertido trabajo y clientela, se convirtió en el centro de un escándalo racial. Bell Pottinger fue contratada por Oak Bay Capital (una empresa de inversiones) para reparar la imagen de la familia Gupta después de que se viera envuelta en una saga de corrupción relacionada con sus estrechos vínculos con el expresidente sudafricano Jacob Zuma.[4] Las acusaciones de corrupción giraban en torno a la influencia indebida que la familia ejercía sobre la administración de Zuma para "conseguir contratos e influir en los nombramientos políticos".[5] Bell Pottinger lanzó una campaña cargada racialmente para desviar la atención, y esto avivó tensiones raciales.[6]

En mayo de 2017, se filtraron correos electrónicos que relacionaban a Bell Pottinger, la familia Zuma, la familia Gupta con la invención de la campaña de distracción basada en el racismo que utilizó las redes sociales.[7] Además, los correos electrónicos filtrados revelaron que la empresa pagó a perfiles de X (antes Twitter) para "trollear a periodistas y difundir propaganda". [8]

La campaña introdujo comportamientos y tendencias extremistas en el panorama político sudafricano. Las redes sociales alimentaron debates diarios sobre el monopolio de capital blanco, lo que polarizó aún más a la sociedad, y Bell Pottinger también socavó y engañó a periodistas que cuestionaban la integridad de sus acciones. Los trolls y bots de Internet empleados por Bell Pottinger se establecieron y organizaron en espacios online en lo que ahora se ha denominado la brigada de la transformación económica radical (TER) y los partidarios de Zuma.

La base de apoyo a Zuma y la brigada TER volvieron a entrar en acción en 2021, cuando disturbios civiles se extendieron por todo el país, especialmente en KwaZulu-Natal y Gauteng. El catalizador de los disturbios fue la inminente detención y encarcelamiento de Jacob Zuma.[9] En

los meses previos a este suceso, Zuma desacató la orden del Tribunal Constitucional de Sudáfrica de cumplir con una citación que le obligaba a comparecer ante la Comisión Judicial de Investigación sobre las Denuncias de Captura del Estado, Corrupción y Fraude en el Sector Público, incluidos los Órganos del Estado. Junto con la actitud generalmente descortés de Zuma hacia el Tribunal y sus procesos, este desafío culminó en una condena a 15 meses de prisión. Esto provocó una indignación generalizada entre su numeroso grupo de fieles seguidores, lo que posiblemente llevó a los disturbios de julio de 2021.

Los disturbios de julio se caracterizaron por una ola de protestas, saqueos, incendios y asesinatos entre el 9 y el 17 de julio de 2021, que afectaron en gran medida a las provincias de KwaZulu-Natal y Gauteng.[10] Un período de colapso evidente y completo del orden y la ley.[11] Lo que comenzó como un saqueo de tiendas y negocios se convirtió en poco tiempo en un grave episodio de violencia social.[12] Aproximadamente 350 personas perdieron la vida en KwaZulu-Natal, lo que los expertos calificaron como "los peores disturbios públicos desde el fin del régimen del apartheid".[13]

A pesar de durar nueve días, la agitación sociopolítica durante los disturbios culminó en una destrucción a gran escala, cuyos efectos aún se sienten años después. La Asociación Sudafricana de Propietarios (SAPOA, por su sigla en inglés) estimó que los daños a la propiedad ascendieron a 50.000 millones de rands (equivalentes a 3.400 millones de dólares estadounidenses).[14]

Los disturbios fueron impulsados por un creciente descontento en las redes sociales. Los grupos de apoyo a Jacob Zuma acuñaron, *inter alia*, los hashtags #FreeJacobZuma y #ShutdownKZN para clamar por una paralización a nivel nacional hasta que se liberara al expresidente.[15] En enero de 2024, el informe de la Comisión Sudafricana de Derechos

Humanos (SAHRC, por su sigla en inglés) confirmó el papel de las redes sociales en la exacerbación de las tensiones.[16]

La incitación a la violencia fue impulsada por la difusión de la desinformación. La hija de Jacob Zuma, Duduzile Zuma-Sambudla, fue una de las principales instigadoras de los disturbios al publicar imágenes antiguas en X como evidencia de los disturbios "actuales", sabiendo que las personas apoyadoras de Zuma tendrían una reacción emocional a esto.[17]

Es muy preocupante que se pudiesen difundir este tipo de incitaciones violentas y desinformación sin que fuesen eliminadas.

En 2023, en respuesta a estos incidentes, al aumento de la desinformación durante la pandemia de COVID-19 y a la creciente preocupación por la propagación del discurso de odio y la xenofobia en las plataformas de redes sociales, el Legal Resource Centre, junto con Global Witness, llevó a cabo una serie de investigaciones sobre la capacidad de las empresas de redes sociales para detectar el discurso de odio, la incitación a la violencia y la desinformación electoral en el contexto cultural y lingüístico de Sudáfrica.

Probamos Facebook, Twitter (X), Google (YouTube) y TikTok enviando contenido lleno de odio, xenófobo, misógino y desinformación electoral que violaba todas las normas comunitarias de esas plataformas, en forma de anuncios, que posteriormente eliminamos antes de su publicación.

Los resultados de nuestras investigaciones demostraron que estas plataformas eran incapaces de detectar el discurso de odio, la incitación a la violencia y la desinformación, y que no moderaban adecuadamente los contenidos dentro del contexto cultural y lingüístico de Sudáfrica.

El incidente más reciente y preocupante de utilizar la desinformación para polarizar a la sociedad sudafricana por motivos raciales se produ-

jo después de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025.

El 23 de enero de 2025, el presidente de Sudáfrica promulgó la Ley de Expropiación, que da efecto al artículo 25 de la Constitución de la República de Sudáfrica y deroga la Ley de Expropiación de 1975, anterior a la democracia. El objetivo principal de la cláusula sobre la propiedad incluida en la Constitución y en la Ley de Expropiación era corregir las desigualdades del pasado en materia de propiedad de la tierra, concretamente abordar el expolio de la tierra de la mayoría negra durante la colonización y el apartheid. Las leyes del apartheid, como la Ley de Tierras Nativas de 1913, limitaban la propiedad de la tierra por parte de las personas negras al 7%. La Ley de Expropiación recorrió un extenso proceso constitucional antes de ser firmada, que incluyó un amplio proceso de consulta pública, y se ha considerado una herramienta para que el gobierno adquiera tierras para su redistribución y determine quién tiene los poderes de expropiación.[18]

Ha habido muchas críticas a la Ley de Expropiación, entre ellas las de AfriForum, una organización sin ánimo de lucro fundada para defender los intereses de la población afrikáner blanca. El 30 de enero de 2025, la organización declaró públicamente que lanzaría una campaña internacional para influir en las partes interesadas internacionales sobre lo que ellos perciben como una persecución a la población afrikáner blancas en Sudáfrica y que iban a movilizar oposición en el extranjero contra las amenazas a sus derechos de propiedad.

Tres días después de publicar esta declaración pública, Donald Trump tuiteó lo siguiente:

> Sudáfrica está confiscando tierras y tratando MUY MAL a ciertos sectores de la población. Es una situa-

> ción grave que los medios de comunicación radicales de izquierda no quieren mencionar. Se está produciendo, como mínimo, una VIOLACIÓN masiva de los derechos humanos, a la vista de todos. Estados Unidos no lo tolerará, tomaremos medidas. Además, ¡cortaré toda financiación futura a Sudáfrica hasta que se haya completado una investigación exhaustiva de esta situación!

Donald Trump cumplió posteriormente su amenaza y suspendió toda la ayuda financiera a Sudáfrica.

El momento en que se produjeron las amenazas de AfriForum y las consecuencias de lo que ocurrió a continuación pueden apuntar directamente a que difundieron información falsa o engañosa sobre la nueva Ley de Expropiación, afirmando que provocaría la desposesión de tierras de la población sudafricana blanca. Esta afirmación no solo es totalmente falsa, sino que también omite las disposiciones de la propia Ley de Expropiación, que establece claramente que las tierras que se utilizan actualmente no serán expropiadas. Esta narrativa engañosa también contradice directamente la Constitución sudafricana, que busca abordar las injusticias históricas relacionadas con la tierra y promover la equidad, en lugar de fomentar la división basada en la raza.

AfriForum también ha difundido en el pasado información falsa sobre los asesinatos de granjeras/os blancas/os, que ha sido citada de forma imprudente por la administración de los Estados Unidos (EE. UU.), según la cual la población granjera afrikáner blanca está siendo atacada en Sudáfrica y, por lo tanto, debería tener derecho a asilo en los EE. UU. En las granjas y las explotaciones agrícolas, la mayoría negra solo posee el 5% de la tierra, mientras que la minoría blanca posee el 72% de las tierras.[19] También hay aproximadamente

20.000 asesinatos cometidos en Sudáfrica cada año, y de promedio, 50 de ellos son granjeras/os blancas/os.[20] No hay pruebas de violencia dirigida contra granjeras/os blancas/os para tomarles las tierras.

No es sorprendente que el presidente de los Estados Unidos utilice la plataforma de un aliado, Elon Musk, para difundir desinformación. Musk también ha difundido desinformación en su plataforma de redes sociales, donde afirmó falsamente que el gobierno sudafricano está perpetuando un "genocidio contra los blancos".[21] Por lo tanto, X difunde descaradamente información falsa y engañosa sin verificar los hechos, lo cual ha tenido consecuencias reales para la población sudafricana que depende de la ayuda financiera de Estados Unidos.

3. Responsabilidad tecnológica dentro del marco legal sudafricano

Actualmente, no existe ninguna legislación que aborde la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas por los daños causados a las personas usuarias sudafricanas en sus plataformas de redes sociales.

La Constitución Sudafricana es una de las constituciones más progresivas en el mundo. De ella se derivan muchos derechos civiles y políticos justiciables, así como también derechos socioeconómicos. Toda persona tiene derecho a la igualdad y a la no discriminación (artículo 9) y a la dignidad humana (artículo 10).

La Constitución también garantiza la libertad de expresión (artículo 16), pero está limitada a que no constituya apología del odio por motivos de raza, etnia, sexo o religión, o incitación inminente a la violencia. Si bien estas disposiciones constitucionales garantizan recursos a las víctimas de abusos en línea que tienen consecuencias en la vida real, estas pro-

tecciones permiten emprender acciones legales contra quien publica odio e incitación a la violencia en internet, y no contra las plataformas tecnológicas que permiten, amplifican y recomiendan contenidos de odio en sus plataformas.

Sin embargo, la legislación de protección de los consumidores puede proporcionar algún recurso contra las grandes empresas tecnológicas. Aun así, hasta la fecha no se ha presentado ante los tribunales sudafricanos ninguna demanda contra las grandes empresas tecnológicas por el diseño defectuoso de sus plataformas y los daños resultantes a los que exponen a las personas usuarias sudafricanas.

Sudáfrica carece también de un marco político que regule las grandes empresas tecnológicas en relación con las redes sociales y la desinformación.

La falta de un marco legislativo y político, similar a la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Marketing Digital de la Unión Europea, que establecen amplias medidas de rendición de cuentas y transparencia, es motivo de preocupación porque deja a las personas usuarias sudafricanas de las plataformas de redes sociales vulnerables a los daños en línea. Esto puede influir en narrativas políticas divisorias y sembrar una división racial que podría volver infructuosos los logros conseguidos tras el apartheid.

4. Conclusión

Los tres incidentes descritos en este artículo ofrecen una visión general de la desinformación, la información errónea y la incitación a la violencia en Sudáfrica durante la última década. Otros casos, como las elecciones nacionales de 2019 y 2024 y los ataques xenófobos, no se analizan

aquí, pero son igualmente importantes. Las grandes empresas tecnológicas han creado plataformas en las que la ciudadanía de a pie, líderes empresariales, autoridades políticas y gubernamentales pueden congregarse durante importantes acontecimientos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, su poder desenfrenado a la hora de amplificar y recomendar desinformación y odio en línea está intrínsecamente ligado al resultado de estos acontecimientos. Los contenidos perjudiciales que se comparten tienen consecuencias en la vida real que a menudo incluyen la violencia. Los poderes Legislativo y Ejecutivo de Sudáfrica tienen el deber de garantizar que existan políticas y un marco legislativo que obliguen a las grandes empresas tecnológicas a proteger la vida y los derechos humanos.

Notas

1 Foro Económico Mundial, *Global Risks Report 2024*, pg. 7, 10 de enero de 2024, visitado el 30 de marzo de 2025, https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/.

2 Foro Económico Mundial, *Global Risks Report* 2024.

3 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (CTED, por su sigla en inglés), "The impact of the COVID-19 pandemic on terrorism, counter-terrorism and countering violent extremism (Update)", diciembre de 2020, visitado el 28 de agosto de 2025, https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/cted_paper_the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-counter-te.pdf.

4 "The Guptas and their links to South Africa's Jacob Zuma", *BBC News*, 14 de febrero de 2018, visitado el 30 de marzo de 2025, https://www.bbc.com/news/world-africa-22513410.

5 Chris Johnston, "The PR firm Bell Pottinger failed in 'race hate' campaign", *BBC News*, 4 de septiembre de 2017, visitado el 30 de marzo de 2025, https://www.bbc.com/news/business-41145883.

6 "Save SA demands full disclosure form #Bell Pottinger", *IOL*, 6 de julio de 2017, visitado el 30 de marzo de 2025, https://www.iol.co.za/news/save-sa-demands-full-disclosure-from-bellpottinger-10167363.

7 Alex Eliseev, "The Gupta scandal: how a British PR firm came unstuck in South Africa", The New Statesman, 20 de julio de 2017, visitado el 30 de marzo de 2025, https://www.newstatesman.com/culture/2017/07/gupta-scandal-how-british-pr-firm-came-unstuck-south-africa.

8 Alex Eliseev, "The Gupta scandal".

9 Clayton Hazvinei Vhumbunu, "The July 2021 Protests and Socio-political Unrest in South Africa", *Accord*, 10 de diciembre de 2021, visitado el 30 de marzo de 2025, https://www.accord.org.za/conflict-trends/the-july-2021-protests-and-socio-political-unrest-in-south-africa/.

10 Noluthando Phungula, "Understanding the Dynamics of South Africa's July 2021 Social Unrest", *Journal of Nation-building & Policy Studies*, vol. 8, no. 1 (2024): 71-87, pg 72.

11 Mary de Haas, "Beyond protest: violence, looting and anarchy", en Heidi Brooks, *Protest in South Africa: Rejection, Reassertion, Reclamation* (Mapungubwe Institute for Strategic Reflection - MISTRA, 2023).

12 Ngogi Emmanuel Mahaye, Sibongamandla Silindokuhle Dlomo and Oluwatoyin Ayodele Ajani, "Impact of Public Protests on Education System: A Case of 2021 Political Unrest in South Africa", en *International Journal of Research in Business and Social Science*, vol.12, no. 2 (2023): 348-57, pg 348.

13 Noluthando Phungula, "Understanding the Dynamics of South Africa's July 2021 Social Unrest", en J*ournal of Nation-building & Policy Studies,* vol. 8, no. 1 (2024): 71-87, pg.73.

14 Clayton Hazvinei Vhumbunu, "The July 2021 Protests and Socio-political Unrest in South Africa", *Accord,* 10 de diciembre de 2021, visitado el 30 de marzo de 2025, https://www.accord.org.za/conflict-trends/the-july-2021-protests-and-socio-political-unrest-in-south-africa/.

15 Lizette Lancaster, "South Africa's Unrest or an Attempted Insurrection? Violence in July", en *Protest*, vol. 2, no. 1 (2022): 114-136, pg. 123.

16 South African Human Rights Commission, J*uly's People: The National Investigative Hearing Report into the July 2021 Unrest in Gauteng and KwaZulu-Natal*, 2024, visitado el 30 de marzo de 2025, https://www.sahrc.org.za/home/21/files/JULY%20UNREST%20REPORT%20FINAL_29%20JAN%202024.pdf.

17 Vhonani Petla, "Information Disorders and Civil Unrest: An Analysis of the July 202 Unrest in South Africa", en *Digital Policy Studies*, vol. 2 no.1 (2023): 23-31, pg. 28.

18 Ley de Expropiación 13 de 2024, sección 2.

19 Rural Development and Land Reform Department, Republic of South Africa, *Land Audit Report, 2017. Phase II: Private land ownership by race, gender and nationality*, pg. 7, visitado el 30 de marzo de 2025, https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201802/landauditreport13feb2018.pdf.

20 Tom Cooks, "Why Trump is reacting to the Expropriation Act", *Business Day*, 3 de febrero de 2025, visitado el 30 de marzo de 2025, https://www.businesslive.co.za/bd/national/2025-02-03-why-trump-is-reacting-to-the-expropriation-act/.

21 Mithil Aggarwal, "How a land law sparked Elon Musk's accusations of 'genocide' against his home country", *NBC News*, 10 de febrero de 2025, visitado el 30 de marzo de 2025, https://www.nbcnews.com/news/world/south-africa-racist-white-farmers-trump-musk-genocide-ramaphosa-rcna190749.

Recibido en marzo de 2025.

Sherylle Dass es la directora regional de la oficina de Ciudad del Cabo del Legal Resources Centre y abogada sénior.

Yanela Frans es una abogada que completó sus prácticas en 2024 en el Centro de Recursos Jurídicos. Estudió en la Universidad de Witwatersrand, donde obtuvo su licenciatura en Derecho y Relaciones Internacionales y su licenciatura en Derecho (LLB, por su sigla en inglés).

sherylle@lrc.org.za | yanela@lrc.org.za | jordan@lrc.org.za

